

Guía conceptual de la Dimensión
“Gestión del Marco Normativo
Institucional”
(Estructura de definiciones operacionales)

Dimensión

Definición

Indicadores

Variables

Items

Definición: Gestión del Marco Normativo Institucional

Es la gestión eficiente de los procesos sustantivos a través de la interpretación, aplicación o definición (según sea el caso) de normas, reglas y estándares específicos que rigen el funcionamiento y las actividades que realiza una institución (normas internas: políticas, manuales de organización y funciones o de procedimientos, códigos de conducta y normas externas: regulaciones sectoriales, estándares profesionales, normativas gubernamentales o requerimientos de organismos reguladores) tomando en cuenta los principios de juridicidad, jerarquía normativa, practicidad y seguridad jurídica, con el fin de alcanzar los resultados propuestos, elevar continuamente la calidad de los bienes y servicios y generar valor público en los usuarios.

La juridicidad, se refiere al análisis crítico y reflexivo de las normas, desde una perspectiva ética y de justicia. Lo que permite asegurar el respeto a los derechos y obligaciones de las partes involucradas, al considerar tanto la letra de la ley, como su espíritu, los valores y principios que la fundamentan.

La jerarquía normativa refiere a tomar en cuenta la estructura jerárquica y el orden de prioridad de las normas legales, para que en caso de contradicción normativa, las normas de rango superior prevalezcan sobre las normas de rango inferior.

La seguridad jurídica implica que todo lo relacionado con la organización y el funcionamiento interno de una institución deben garantizar certeza y previsibilidad en la aplicación de las normas legales, así como protección de derechos y obligaciones a los ciudadanos y todos los actores involucrados.

La practicidad implica simplificar los procedimientos, garantizar la aplicabilidad de las normas y buscar soluciones efectivas que permitan resolver obstáculos y prevenir complicaciones innecesarias en la administración pública.

En resumen gestionar el marco normativo institucional es aplicar la juridicidad, la jerarquía normativa, la seguridad jurídica y la practicidad como herramientas que permiten a una institución actuar de forma ágil, para producir y brindar servicios a los ciudadanos, con efectividad.

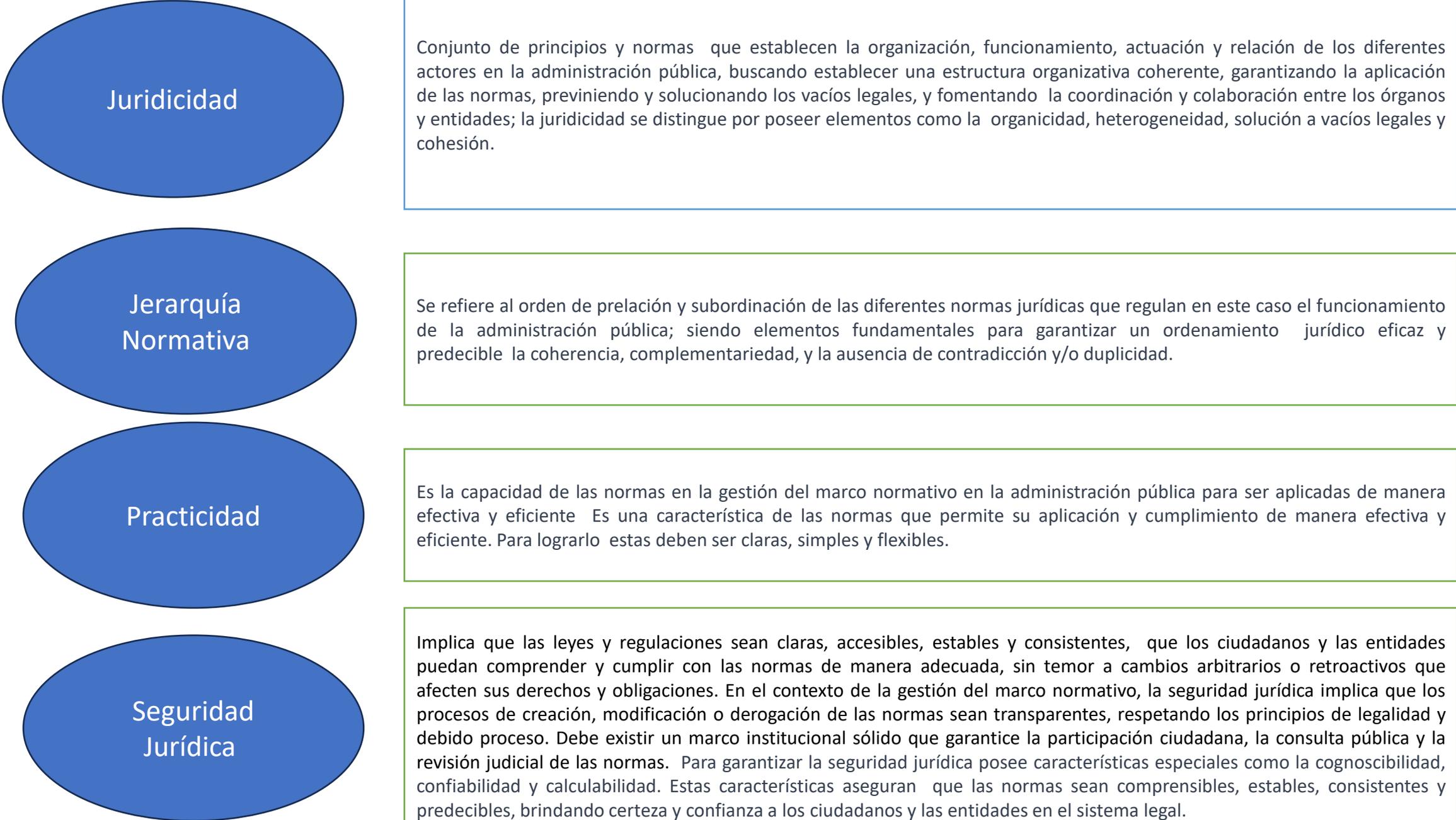
Gestión del Marco Normativo

Juridicidad

Jerarquía
Normativa

Practicidad

Seguridad
Jurídica



Juridicidad

Conjunto de principios y normas que establecen la organización, funcionamiento, actuación y relación de los diferentes actores en la administración pública, buscando establecer una estructura organizativa coherente, garantizando la aplicación de las normas, previniendo y solucionando los vacíos legales, y fomentando la coordinación y colaboración entre los órganos y entidades; la juridicidad se distingue por poseer elementos como la organicidad, heterogeneidad, solución a vacíos legales y cohesión.

Jerarquía
Normativa

Se refiere al orden de prelación y subordinación de las diferentes normas jurídicas que regulan en este caso el funcionamiento de la administración pública; siendo elementos fundamentales para garantizar un ordenamiento jurídico eficaz y predecible la coherencia, complementariedad, y la ausencia de contradicción y/o duplicidad.

Practicidad

Es la capacidad de las normas en la gestión del marco normativo en la administración pública para ser aplicadas de manera efectiva y eficiente. Es una característica de las normas que permite su aplicación y cumplimiento de manera efectiva y eficiente. Para lograrlo estas deben ser claras, simples y flexibles.

Seguridad
Jurídica

Implica que las leyes y regulaciones sean claras, accesibles, estables y consistentes, que los ciudadanos y las entidades puedan comprender y cumplir con las normas de manera adecuada, sin temor a cambios arbitrarios o retroactivos que afecten sus derechos y obligaciones. En el contexto de la gestión del marco normativo, la seguridad jurídica implica que los procesos de creación, modificación o derogación de las normas sean transparentes, respetando los principios de legalidad y debido proceso. Debe existir un marco institucional sólido que garantice la participación ciudadana, la consulta pública y la revisión judicial de las normas. Para garantizar la seguridad jurídica posee características especiales como la cognoscibilidad, confiabilidad y calculabilidad. Estas características aseguran que las normas sean comprensibles, estables, consistentes y predecibles, brindando certeza y confianza a los ciudadanos y las entidades en el sistema legal.

Juridicidad

Organicidad

Heterogeneidad

Solución de
Vacío Legal

Cohesión

Organicidad

Se refiere a la estructura organizativa de la administración pública, es decir, cómo se organiza y se distribuyen las funciones, competencias y responsabilidades dentro de dicha administración. La juridicidad se vincula con la organicidad al establecer las normas legales que regulan la creación, organización y funcionamiento de los diferentes órganos y entidades de la administración pública. Estas normas establecen los límites y las facultades de cada organismo, así como los procedimientos a seguir.

Heterogeneidad

Se refiere a la diversidad de entidades, organismos y actores que participan en la toma de decisiones y en la ejecución de las políticas públicas. La juridicidad juega un papel importante en la gestión de esta heterogeneidad, ya que establece normas y principios que deben ser aplicados de manera uniforme y coherente en todas las instancias de la administración pública. Esto permite mantener la legalidad y evitar arbitrariedades en el ejercicio de las funciones públicas.

Solución de Vacío Legal

Esta busca evitar los vacíos legales mediante la creación y actualización constante de normas y regulaciones que cubran todas las áreas relevantes de la administración pública. Cuando se detecta un vacío legal, es responsabilidad de los órganos competentes identificar la necesidad de regulación y proponer las medidas necesarias para llenar ese vacío.

Cohesión

Se refiere a la capacidad de los diferentes órganos y entidades de trabajar de manera conjunta y coordinada para alcanzar los objetivos comunes. La juridicidad contribuye a la cohesión al establecer las normas y procedimientos que regulan la colaboración y coordinación entre los distintos actores de la administración pública. Esto incluye la definición de competencias, la creación de mecanismos de cooperación y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.

Jerarquía Normativa

Coherencia

Complementariedad

Contradicción

Duplicidad

Variables

Coherencia

Compatibilidad de las normas entre sí, previniendo conflictividad entre las mismas. Conocimiento del funcionario público o servidor de la compatibilidad normativa.

Complementariedad

Se refiere a que las normas deben funcionar de manera conjunta, cubriendo todos los aspectos necesarios y evitando vacíos normativos.

Contradicción

Se produce cuando dos normas son incompatibles entre sí, generando confusiones o conflictos en su aplicación.

Duplicidad

Se produce cuando existen normas que regulan la misma materia de manera redundante, lo cual puede generar confusión o superposición de regulaciones.

Practicidad

Claridad

Simplicidad

Capacidad de
implementación

Cumplimiento

Claridad

Las normas deben redactarse de manera clara y comprensible, utilizando un lenguaje sencillo y evitando ambigüedades. Deben ser lo suficientemente precisas para que los ciudadanos y los funcionarios públicos puedan entender fácilmente sus requisitos y obligaciones.

Simplicidad

Las normas deben ser lo más simples y concisas posible, evitando la complejidad innecesaria. Esto implica eliminar trámites burocráticos excesivos y simplificar los procesos administrativos para facilitar su implementación. Normas complicadas y engorrosas pueden generar confusión y obstáculos para su aplicación adecuada.

Capacidad de Aplicación

Las normas deben ser prácticas y realistas en su aplicación. Deben tener en cuenta las capacidades y recursos disponibles en la administración pública para hacerlas cumplir. Es importante considerar la capacidad de los funcionarios para interpretar y aplicar las normas de manera consistente y efectiva.

Cumplimiento

Las normas deben ser diseñadas de tal manera que fomenten su cumplimiento por parte de los ciudadanos y las entidades sujetas a ellas. Esto implica establecer incentivos adecuados para el cumplimiento y sanciones proporcionales para el incumplimiento. Además, es importante brindar el apoyo y la orientación necesarios para que las personas puedan cumplir con las normas de manera efectiva.

Seguridad Jurídica

Cognoscibilidad

Confiabilidad

Calculabilidad

Cognoscibilidad

La seguridad jurídica requiere que las normas legales sean comprensibles y accesibles para todos los ciudadanos y las entidades. Deben estar redactadas de manera clara y precisa, utilizando un lenguaje comprensible, para que las personas puedan conocer y entender sus derechos y obligaciones. La cognoscibilidad implica que las normas estén publicadas y sean fácilmente accesibles, ya sea en forma impresa o en línea, para que cualquier persona interesada pueda consultarlas y conocer su contenido.

Confiabilidad

La seguridad jurídica implica que las normas legales sean estables y consistentes en el tiempo. Los ciudadanos y las entidades deben poder confiar en que las leyes y regulaciones no cambiarán constantemente o de manera arbitraria. Esto implica que los cambios en las normas se realicen de manera adecuada, a través de procedimientos legales establecidos, como la promulgación de nuevas leyes o la modificación de las existentes. La confiabilidad también se relaciona con el respeto a los principios del debido proceso legal y la garantía de que las decisiones judiciales se basen en la interpretación y aplicación coherente de la ley.

Calculabilidad

La seguridad jurídica implica que las consecuencias jurídicas de los actos y acciones sean predecibles y calculables. Las personas y las entidades deben poder anticipar las consecuencias legales de sus acciones y comportamientos, para poder actuar de manera informada y responsable. Esto implica que las normas sean claras en cuanto a las sanciones y responsabilidades que se derivan de su incumplimiento, así como los derechos y beneficios que se obtienen al cumplirlas. La calculabilidad implica que las decisiones judiciales sean consistentes y predecibles, basadas en la interpretación y aplicación de la ley de manera coherente.